

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA TERCERA DE DECISION LABORAL**

<b>PROCESO</b>	Ejecutivo conexo
<b>DEMANDANTE</b>	JORGE LUIS ECHEVERRI OBREGÓN
<b>DEMANDADO</b>	CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ORTIZ
<b>PROCEDENCIA</b>	Juzgado 19º Laboral del Cto. de Medellín
<b>RADICADO</b>	05001 3105 <b>019 2014 01258</b> 01
<b>INSTANCIA</b>	SEGUNDA
<b>PROVIDENCIA</b>	Auto interlocutorio Nro. 24 de 2021
<b>TEMAS Y SUBTEMAS</b>	Interrupción del término prescriptivo dispuesto en el artículo 90 C.P.C hoy 94 del C.G.P
<b>DECISIÓN</b>	revoca decisión

**Medellín, treinta (30) de junio de dos mil veitiuno (2021)**

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los Magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado del ejecutado, contra el auto interlocutorio proferido el 07 de mayo de 2021 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito, dentro del proceso ejecutivo promovido por **Jorge Luis Echeverri Obregón** en contra de **Carlos Alberto Bolaños Ortiz**, código de radicado único nacional número 05001 3105 **019 2014 01258** 01.

**Antecedentes**

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que **en proveído 12 de julio del año 2017**, el juzgado de conocimiento libró orden de

apremio contra el ejecutado por la suma de \$240.254.865.00 por concepto de regulación de honorarios, más los intereses moratorios.

Seguidamente se agotó el trámite pertinente para lograr la notificación del ejecutado, **quien oportunamente a través de apoderada judicial propuso la excepción de prescripción**, fundamentándola expresamente en las siguientes consideraciones:

*"1. La providencia regulatoria de los honorarios profesionales a favor del ejecutante fue proferida el día 20 de julio del año 2011 y confirmada por el superior en el mes de abril de 2013.*

*2. El termino para ejecución de providencias judiciales es de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su ejecutoria; y en el presente caso que nos ocupa la providencia donde se reguló los honorarios al accionante tiene fecha de ejecutoria del año 2013, como se evidencia dentro del plenario de la demanda entregada como traslado; es decir tiene la providencia cinco (5) años, siete (7) meses.*

*3. El auto de mandamiento de pago solamente fue notificado el día 06 de noviembre de 2018 cuando ya había transcurrido mas de cinco (5) años de la fecha de ejecutoria de la providencia regulatoria de honorarios profesionales.*

*4. La parte demandante no cumplió con los requisitos indicados en los artículos 90 del C. de P.C y el artículo 94 del C.G.P que consagran que para que se interrumpa la prescripción la notificación debe hacerse en el término de un (1) año a partir de la fecha que se profiera el mandamiento de pago, en este caso, el mandamiento de pago fue librado el día 12 del mes de julio del año 2017 y la notificación se efectuó el día seis (6) de noviembre de 2018, es decir han transcurrido dieciséis (16) meses. "*

En audiencia de resolución de excepciones, el 7 de mayo del año en curso, el juzgado de conocimiento **declaró no probadas la excepción de prescripción propuesta** por la parte ejecutada, y en consecuencia ordenó seguir adelante con la actuación, conforme lo ordenado en el mandamiento de pago; así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 446 del C.G. del P., ordenó efectuar por las partes la liquidación del crédito. Condenó en costas al demandado, fijando como agencias en derecho la suma de \$20.000.000.00.

Como sustento de su decisión, luego de explicar el término prescriptivo en materia laboral conforme a lo dispuesto en los artículos 151 del CPT y de la S.S. y 488 CST y hacer un recuento de lo acontecido dentro del trámite, expuso que según lo plasmado en la contestación, se entendía que lo pretendido era la aplicación de la prescripción, teniendo en cuenta la distancia temporal existente entre la fecha del título y la notificación del auto que libró mandamiento de pago, esto es que se diera aplicación a lo consagrado en el artículo 90 CPC hoy 94 CGP, frente a lo cual explicó que si bien se superó el año previsto por la norma para la referida notificación, tal disposición no podía aplicarse de manera automática, debiendo verificarse el actuar del accionante, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia especializada, citando apartes de lo expuesto en las providencias SL5159 del 11 de noviembre de 2020 y SL3693 del 15 de marzo de 2017, concluyendo que en el caso, el proceso pasó por varios despachos judiciales, donde además estuvo inmerso en medidas de descongestión, luego, la tardanza en el trámite no es atribuible a un actuar descuidado del ejecutante o de mala fe, sino precisamente a las dificultades procesales que se presentaron.

### **Recurso apelación**

Interpuesto por la apoderada del ejecutado, argumentando que remitía la sustentación de su recurso a las razones expuestas al proponer la excepción, enfatizando en que sí fue por causa del ejecutante que no se notificó dentro del término legal a su representado, por cuanto éste dejó pasar conscientemente 16 meses par gestionarla, pues su poderdante nunca estuvo oculto, y tan pronto tuvo conocimiento de la ejecución en su contra contestó, razón por la cual, las normas son claras y deben cumplirse, luego, la decisión debe ser en derecho.

El *A quo* al considerarla debidamente sustentada, concedió el recurso de alzada.

Dando aplicación a lo establecido en el artículo artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, se les corrió traslado a las partes para alegar, no obstante, estas guardaron silencio.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Teniendo en cuenta la decisión adoptada y la inconformidad de la parte recurrente, habrá de establecerse si en el presente evento operó la prescripción frente a la obligación ejecutada, o si por el contrario, es posible seguir adelante con el trámite correspondiente, como lo estableció el juez de primera instancia.

Pues bien, para efectos de resolver la controversia es oportuno acudir a la disposición que consagra la consecuencia aplicada, esto es, el artículo 151 del C.P.T. y la S.S., según el cual las acciones que emanan de las leyes laborales y de la seguridad social, prescriben en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible; ésta se interrumpe por un lapso igual, con el simple reclamo escrito al empleador sobre el derecho reclamado, resultado que reproduce en idénticos términos el artículo 488 del C.S.T.

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable señalar que la interrupción del término extintivo se puede generar, entre otras formas, por el simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador acerca de un derecho debidamente determinado, la cual

comienza a contarse nuevamente a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente, como lo dispone el artículo 489 del C.S.T.; o por la presentación de la demanda, siempre y cuando se notifique el auto admisorio, o el del **mandamiento de pago, dentro del año siguiente**, tal como lo dispone el artículo 94 del C.G.P, aplicable al proceso laboral por remisión del artículo 145 del CPT y la S.S..

Frente a la interrupción del término prescriptivo dispuesto en el artículo 90 del C.P.C. hoy 94 del C.G.P, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha previsto en su jurisprudencia que su aplicación no opera en forma automática, pues entre la presentación de la demanda y su notificación, pueden generarse diversas eventualidades, que no son imputables al actor y que, por lo mismo, no pueden redundar en su perjuicio, como cuando no se efectúa la notificación de por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado, excepciones que están fundadas en la prevención de conductas reprochables desde todo punto de vista, que tienden al abuso de la disposición por parte de los deudores y, en materia laboral, en una protección especial para el trabajador que acude a tiempo a reclamar sus derechos y realiza todas las acciones que están a su alcance para lograr la notificación, por lo que no se le puede sancionar con la prescripción, a pesar de haber actuado diligentemente. (Ver Sentencias SL8716-2014, SL3693-2017, SL2156-2020, SL5159-2020 y SL1680-2021, entre otras).

Por esa misma línea, también es del caso no perder de vista lo explicado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC5680 de 2018, que frente a la norma pluricitada, advierte:

*"El plazo que consagra el artículo 90 es improrrogable, es decir, que la parte que tiene la carga de cumplirlo no puede aducir excusas personales para evadirlo, salvo casos excepcionales como cuando no está dado el presupuesto objetivo para que la parte realice su carga procesal.*

*La carga procesal -explica Carnelutti- es el ejercicio de una facultad cuando dicho ejercicio aparece necesario para el logro del propio interés. «La carga supone el poder-derecho de que gozan las partes, contrapuesto al poder-deber que corresponde al juez. Mientras el órgano jurisdiccional está obligado a ejercitar las facultades que la ley le otorga para impartir justicia, las partes no tienen la obligación de ejercitar sus derechos en juicio, pero si quieren obtener ciertos resultados han de efectuar determinados actos. Por eso, puede definirse la carga procesal como los requisitos que establece la ley de ejecutar determinados actos procesales, si se desea lograr ciertos efectos legales. El juez está sujeto a un imperativo categórico, mientras el que pesa sobre las partes es condicional*

*Entre las cargas procesales que tiene que cumplir la parte que quiere lograr ciertos efectos legales, está la de impulso procesal, siendo la notificación del auto admisorio una especie de ella. En ese orden, no es posible imponer a la parte que tiene que cumplir una carga procesal las consecuencias adversas que se generan de su inobservancia si no están dadas las condiciones reales, materiales y objetivas para su realización.*

*Así, por ejemplo, no es dable exigir al actor el cumplimiento de su carga de notificar el auto admisorio de la demanda, si esa providencia no ha sido proferida por razones no atribuibles a la parte demandante. Por ello el artículo 90 prevé que el término de un año sólo comienza a correr desde que la parte actora se notifica de esa decisión.*

***De igual modo, podrían presentarse circunstancias posteriores a la notificación del auto admisorio al demandante, que le hacen imposible cumplir su carga de impulso procesal mediante el enteramiento de esa providencia al demandado; tal es el caso de cuando está pendiente el decreto y práctica de medidas cautelares que no han podido realizarse por razones ajenas al ámbito de elección y voluntad del actor.***

*En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decreta. Si fueren previas al proceso, se entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersona en aquél o actúe en ellas o firme la respectiva diligencia. Los oficios y despachos para el cumplimiento de las mencionadas medidas solamente se entregarán a la parte interesada cuando se le haya notificado el auto que admitió la demanda o libró mandamiento ejecutivo».*

*El fin principal de las medidas cautelares es garantizar la efectiva ejecución de la providencia, impidiendo que el perjuicio ocasionado al derecho sustancial se haga más gravoso, o que no haya manera de cumplir la obligación que declare la sentencia por desaparecer o disminuir los bienes que forman parte del patrimonio del deudor. De ahí que la norma que acaba de citarse prevea que tales medidas sólo han de notificarse a la parte contraria después de su cumplimiento, pues de no tomarse en cuenta tal prevención se correría el riesgo de que el resultado de la acción judicial no*

*pueda hacerse efectivo.*

***En consecuencia, como la finalidad de un proceso que persigue el pago de una obligación patrimonial es, precisamente, la satisfacción de ese pago, y el mismo sólo se garantiza con la práctica de las cautelas, hay que concluir que la condición objetiva para la asignación de la carga procesal de notificar el auto admisorio al demandado no se cumple cuando no ha sido posible practicar las aludidas medidas cautelares por razones ajenas a la voluntad de la parte interesada."***

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, sea lo primero advertir que si bien es cierto, el proceso aquí examinado a causa de las diferencias doctrinarias sobre competencia y jurisdicción y por las medidas de descongestión, trasegó por varias sedes judiciales entre el año 2014 y 2017, también lo es, que la aplicación del término de un año previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso, como claramente lo dispone éste, se debe contabilizar a partir del día siguiente al de la notificación al demandante del auto que libró mandamiento de pago, es decir, desde aquel momento es que se debe examinar su conducta, en el entendido de que si a pesar de su diligencia, no se logra notificar en tiempo a los demandados debido situaciones que no fueron imputables al reclamante, habrá de declararse no configurado el fenómeno prescriptivo.

Aclarado lo anterior, en el caso a examen se tiene que por **auto del 12 de julio de 2017**, el juzgado de conocimiento **libró mandamiento de pago**, proveído que fue notificado por estado No. 100 del **13 de julio** del mismo año; en la misma fecha, atendiendo a la solicitud del ejecutante, se emitieron cuatro oficios dirigidos a la Superintendencia de Notariado y Registro, y a 3 entidades bancarias a efectos de que certificaran si el ejecutando poseía algún bien y cuentas bancarias a su nombre.

Se aprecia a folio 183 del expediente digital (archivo 01. Proceso escaneado) que el ejecutante envió citación al accionada para diligencia de notificación personal **el 21 de agosto de 2018**, sin que con antelación a dicha calenda se observe que el actor hubiese realizado otras gestiones tendientes a efectuar tal diligencia, evidenciándose, que ya desde aquella data se encontraba superado el término de un año dispuesto por la norma pluricitada, pues el plazo fenecía el **14 de julio de 2018**, y la notificación personal se llevó a cabo el **6 de noviembre del mismo año** (archivo 01. Proceso escaneado, folio dig 213), sin que se aprecie del material probatorio que la tardanza para realizar la actuación procesal a su cargo hubiese sido por demoras en la administración de justicia u ocultamiento de la parte demandada.

Sumado a que tampoco, conforme al material probatorio puede colegirse que la condición objetiva para la asignación de la carga procesal de notificar el auto admisorio al demandado no se cumplió al no haber sido posible practicar medidas cautelares atendiendo a razones ajenas a la voluntad de la parte interesada, y es que notese cómo si bien los oficios que solicitó el ejecutante para conocer posibles bienes del ejecutado a efecto de solicitar cautelas fueron emitidos el mismo día que se profirió el mandamiento de pago, esto es el 12 de julio del año 2017, sin embargo, el interesado **tan sólo los reclamó casi 6 meses después, el 29 de enero de 2018**, (fl. 145-148 archivo 01. Proceso escaneado), fecha en la cual, igualmente el juzgado decretó el embargo de un inmueble de propiedad del ejecutado según información del actor (fl.153, ibidem), sin advertirse ninguna otra actividad relacionada con las medidas cautelares, evidenciándose únicamente que el 18 de junio de 2018, el accionante radica escrito a través del cual confiere poder especial al abogado Juan José Escobar



Acosta, memorial entregado al juzgado de conocimiento el 20 del mismo mes y año (folio digital 161), el cual fue tramitado al día siguiente reconociendo la respectiva personería para la representación judicial (fl. 163), sin que se aprecie actuación alguna posterior por parte del interesado tendiente a la notificación del demandado, encontrándose además que solamente hasta el **1 de agosto de 2018**, el apoderado judicial nombrado retiró el oficio No. 56 de orden de embargo que fuera emitido por el despacho desde el mes de enero de aquel año (fl. 165), presentando **para el 21 de agosto de la misma calenda**, varios memoriales, el primero solicitando al juzgado requerir nuevamente a una de entidades bancarias para que informara acerca de los bienes del ejecutado, y otro peticionando embargos de nuevos bienes, y seguidamente **tres días después, el 24 de agosto**, presenta memorial indicando: "*en mi calidad de apoderado judicial del actor en el proceso de la referencia, con todo respeto, le solicito muy comedidamente se digne agilizar la orden de embargo de los inmuebles de propiedad del demandado, expidiendo en el menor tiempo posible los oficios de embargo, toda vez que **como quiera que se le enviará a dicho demandado la citación para diligencia de notificación personal**, en cualquier momento puede insolventarse y hacer nugatoria la demanda, transfiriendo dichos bienes*", época para la cual, el plazo de un año con que contaba el ejecutante para notificar al accionado se encontraba vencido, advirtiéndose que la tardanza para efectuar tal acción no obedeció a morosidad del juzgado o a actos elusivos del demandado, sino a la inactividad o inercia del acreedor, pues su actuar a efectos de lograr medidas cautelares y ejecutar la respectiva notificación comenzó después de fenecido el término para notificación, y en esa medida, al no cumplir con su carga procesal por factores imputables a su actuar, le acarrea la ineficacia de la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda, debiendo entonces revocarse la decisión inicial, para su lugar, declarar probada la excepción de prescripción propuesta.

Ante la prosperidad del recurso, no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia, art. 365-1 del C. G. del P.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, revoca** el auto del 7 de mayo de 2021, proferido por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito dentro del proceso ejecutivo promovido por **Jorge Luis Echeverri Obregón** en contra de **Carlos Alberto Bolaños Ortiz**, para su lugar, declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada.

Ante la prosperidad del recurso, no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia, art. 365-1 del C. G. del P.

Ejecutoriada esta decisión, por secretaria devuélvase la actuación al juzgado de origen para el trámite de su competencia, así como para lo relacionado con el levantamiento de las medidas cautelares en caso de haberse perfeccionado.

Lo resuelto se notifica a las partes por estados virtuales, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

**Los magistrados,** (firmas escaneadas)

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL  
Magistrada

  
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA  
Magistrado

**Certifico: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 114 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 1 de julio de 2021**

---

Secretario